

No. 36679

Multilateral

Agreement between the Central-American States and the Dominican Republic for the prevention and repression of the crime of money laundering and activities, relating to the illicit traffic in narcotic drugs and related crimes. Santo Domingo, 6 November 1997

Entry into force: *5 May 2000, in accordance with article 21 (see following page)*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Central American Integration System, 19 June 2000*

Multilatéral

Accord entre l'Amérique centrale et la République dominicaine pour la prévention et la répression des crimes de blanchiment d'argent et d'avoirs liés au trafic illicite de stupéfiants et aux crimes connexes. Saint-Domingue, 6 novembre 1997

Entrée en vigueur : *5 mai 2000, conformément à l'article 21 (voir la page suivante)*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Système d'intégration centre-américain, 19 juin 2000*

Participant	Ratification
Costa Rica	20 Jan 2000
Dominican Republic	5 May 2000
Nicaragua	5 Jun 1999

Participant	Ratification
Costa Rica	20 janv 2000
Nicaragua	5 juin 1999
République dominicaine	5 mai 2000

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO ENTRE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA PARA LA PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN DE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, RELACIONADOS CON EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS

Las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en adelante "las Partes",

CONSIDERANDO:

Que los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, constituyen un serio disvalor social que merece ser prevenido y reprimido;

Que el proceso de los delitos de lavado de dinero y activos, producto de la actividad delictiva, conduce siempre a una descomposición de las estructuras sociales, políticas y económicas;

Que el dinero proveniente de esas actividades genera distorsión y competencia desleal para las economías legítimas de los países centroamericanos de la República Dominicana;

Que el fin último de esas actividades delictivas es consolidar sus ganancias mediante el empleo de mecanismos tendientes a la legitimación de capitales;

Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, vigente desde el 11 de noviembre de 1990; el mandato contenido en el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Modelo de Legislación sobre el Blanqueo de Dinero y el Decomiso en Materia de Drogas del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), de noviembre de 1995;

Las iniciativas conjuntas del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICAD), de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP), y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que condujeron a la creación del Centro Regional para el Desarrollo y la Cooperación Jurídica en América Central (CEDEJU), en materia de control de la producción y tráfico de drogas;

Que uno de los objetivos principales de CEDEJU es fomentar la armonización de las legislaciones de los países centroamericanos con la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", y el Modelo de Legislación promovidos por el PNUFID; y

La importancia de tener como marco de referencia el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.

POR TANTO:

Deciden suscribir el presente Convenio.

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1
Conceptos Generales**

Para efectos del presente Convenio, se entenderá por:

- 1) **Bienes:** Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, susceptibles de propiedad y valoración económica, así como documentos e instrumentos legales que acrediten la propiedad, y otros derechos sobre dichos activos.
- 2) **Convención:** Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1990.
- 3) **Decomiso:** Pérdida definitiva de bienes, instrumentos y efectos, que provengan de la comisión de un delito, por decisión de autoridad judicial competente, conforme al Artículo 1, letra 1, de la Convención.
- 4) **Embargo preventivo:** Prohibición temporal de transferir, transformar, convertir, enajenar, gravar o mover bienes; custodia o control temporal de bienes en virtud de mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente, para asegurar la indemnización o reparación civil causada por el delito.
- 5) **Instrumentos:** Cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que existe intención de utilizar, de cualquier manera, para la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
- 6) **Persona:** Entes naturales o jurídicos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Para los efectos de este Convenio, ambas tendrán responsabilidad y serán objeto de sanción.

- 7) **Productos:** Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
- 8) **Tráfico ilícito:** Delitos enunciados en los Párrafos 1 y 2 del Artículo 3 de la Convención.
- 9) **Entidades de intermediación financiera autorizadas por la legislación interna de cada Estado Parte:**
 - a) Bancos comerciales y financieras, compañías fiduciarias, compañías de seguros y reaseguros, asociaciones de ahorro y crédito, asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, cooperativas de crédito y otras instituciones o establecimientos de ahorro, crédito o débito.
 - b) Casas de corretaje o de intermediación para negociar valores.
 - c) Casas de intermediación para la venta de divisas o casas de cambio.
 - d) Otra de naturaleza similar.

Artículo 2

Delitos de Lavado y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos

Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, las siguientes conductas:

1. Convertir o transferir recursos o bienes, con conocimiento de que proceden, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de uno de estos delitos.
2. Contribuir a ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad verdadera de recursos, bienes o derechos relativos a ellos, previo conocimiento de que proceden directa o indirectamente del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos.
3. Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos o de la participación en uno de esos delitos.

Las sanciones correspondientes a cada delito serán fijadas por cada Estado Parte de conformidad a su legislación interna y tomando en consideración las establecidas por los demás Estados Parte.

De igual manera, se establecerán penas agravadas cuando tales delitos sean cometidos por funcionarios y empleados públicos.

Artículo 3 Competencia

La autoridad o el tribunal competente, de conformidad al derecho interno de cada Estado investigará, enjuiciará, fallará o sentenciará los delitos a los que se refiere el Artículo 2 de este Convenio, independientemente de que el delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos se hayan cometido en otra jurisdicción territorial, sin perjuicio de la extradición conforme a la legislación interna de cada Estado Parte.

CAPITULO II BIENES, PRODUCTOS E INSTRUMENTOS

Artículo 4 Medidas Cautelares sobre los Bienes, Productos o Instrumentos

De acuerdo con el derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad competente dictará, en cualquier momento, las medidas cautelares encaminadas a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos provenientes de los delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Artículo 5 Decomiso de Bienes o Instrumentos

Cuando una persona sea condenada por el delito de lavado de dinero, relacionado con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, el tribunal ordenará que los bienes, productos o instrumentos relacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

Artículo 6
Terceros de Buena Fe

Las medidas y sanciones a que se refieren los Artículos 4 y 5 se aplicarán sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, se efectuará la debida notificación a fin de que se presenten a hacer valer sus derechos quienes puedan alegar interés legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos. El ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados Parte considerará la forma más expedita y eficaz de notificación, según se trate de bienes registrables o no registrables.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad competente dispondrá devolver, al reclamante, los bienes, productos o instrumentos cuando se haya acreditado y concluido que:

1. El reclamante tiene legítimo derecho respecto de los bienes, productos o instrumentos; y

Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o implicancia con respecto a delitos de lavado provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, objeto del proceso; y

2. El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.

Artículo 7
Destino de Bienes, Productos o Instrumentos
Sujetos a Medidas Cautelares

Si su derecho interno así lo permitiera, cada Estado Parte pedirá:

- 1) Autorizar a las autoridades encargadas de prevenir, controlar, tratar y reprimir los delitos a que se refiera el presente Convenio, el uso de los bienes, productos o instrumentos salvaguardando la obligación estatal de garantizar la preservación debida de los mismos.

Los Estados Parte tomarán las medidas pertinentes para que se sufraguen los gastos de uso y mantenimiento de lo embargado preventivamente.

- 2) Otorgar, cuando las circunstancias lo ameriten, la autorización establecida en el inciso anterior a un tercero de buena fe, o al propietario debidamente acreditado del bien, producto o instrumento sujeto a embargo preventivo.

Artículo 8
Destino de Bienes, Productos o Instrumentos Decomisados

Cuando, conforme al Artículo 5 de este Convenio, se decomisen bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, la autoridad competente podrá enajenarlos, destinarlos al uso oficial o transferirlos a las entidades públicas correspondientes, según el derecho interno de cada Estado Parte.

Artículo 9
Bienes, Productos o Instrumentos de Delitos
Cometidos en el Extranjero

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad competente podrá ordenar el embargo o cualquier medida cautelar relativos a los bienes, productos o instrumentos situados en su jurisdicción territorial, aplicables a delitos de lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, cometidos contra las leyes de otro país, cuando dichos delitos, de haberse cometido en su jurisdicción también fuesen considerados como tales.

CAPITULO III
ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA
Y ACTIVIDADES FINANCIERAS

Artículo 10
Instituciones y Actividades Financieras

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, serán objeto de control por las autoridades competentes de los Estados Parte. Asimismo, las personas que realicen las siguientes actividades:

- a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques;
- b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o rescate de cheques de viajero o giro postal;
- c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio; y
- d) Otras actividades que impliquen intermediación financiera, así como la emisión, operación o fiscalización de instrumentos o títulos de crédito.

Artículo 11:

En los Estados Parte con cuentas cifradas, anónimas u otras que operen bajo representación, civil o mercantil, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a las que se refiere el Artículo precedente, estarán obligadas a conocer la verdadera identidad de sus propietarios, para que puedan suministrarla a las autoridades encargadas del control, en las investigaciones sobre la materia regulada por este Convenio.

Esas entidades deberán registrar y verificar, por medios fehacientes, identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social de las personas, sean clientes ocasionales o habituales, mediante documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, carnets de conducir, contratos sociales y estatutos o cualesquiera otros documentos oficiales o privados, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial, la apertura de cuentas nuevas, el otorgamiento de libretas de depósito, las transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o las transacciones en efectivo que superen un determinado monto de conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente en cada Estado Parte.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, antes referidas, deberán adoptar medidas razonables para obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se realice una transacción, cuando exista duda de que tales clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el Estado donde tengan su sede o domicilio.

Durante la vigencia de una operación, y por lo menos cinco años a partir del fin de la transacción, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo precedente, deberán mantener registros de la información y documentación requeridas en este Artículo. Asimismo, deberán conservar los registros de la identidad de sus clientes, estados de cuenta y correspondencia comercial según lo determine la autoridad competente, por lo menos durante cinco años después del cierre de la cuanta.

Además, estas entidades deberán mantener registros que permitan reconstruir transacciones financieras que superen determinado monto de conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente, en cada Estado Parte al menos cinco años después de concluida la transacción.

Artículo 12 **Disponibilidad de Registros**

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, deberán cumplir, pronto y dentro del plazo que se determine, las solicitudes de información que las dirijan las autoridades competentes respecto de la información y documentación citadas en el Artículo anterior. Estos datos serán utilizados en investigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según corresponda, relacionados con delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, o con violaciones de lo dispuesto en este Convenio.

Las autoridades competentes de un Estado podrán compartir información con las autoridades competentes de otros Estados, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

Artículo 13 Registro y Notificación de Transacciones en Efectivo

Las instituciones financieras y las que realicen actividades financieras, a que se refirió el Artículo 10 de este Convenio, deberán registrar, en un formulario diseñado por la autoridad competente de cada Estado Parte, cada transacción en efectivo en moneda nacional o extranjera que supere el monto determinado de conformidad con lo dispuesto por aquella. Acerca de cada transacción los formularios deberán contener, por lo menos, los siguientes datos:

- a) La identidad, firma y dirección de la persona que físicamente realiza la transacción;
- b) La identidad y dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción;

La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la hubiere;

La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen;
- e) El tipo de transacción de que se trate, tales como depósitos, retiro de fondos, cambio de monedas, cobro de cheques, compra de cheques certificados o cheques de cajero, órdenes de pago u otros pagos de transferencias efectuadas por la institución financiera o mediante ella;
- f) La identidad de la institución financiera donde se realizó la transacción;
- g) La fecha, hora y monto de la transacción;

Ese registro será llevado, en forma precisa y completa, por la institución financiera el día en que se realice la transacción y, a partir de esa fecha, se conservará durante el término de cinco años.

Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, que en conjunto superen determinado monto, serán consideradas una transacción única si son realizadas por determinada persona o en su beneficio, durante un día o en cualquier otro plazo que fije la autoridad competente. Cuando la institución financiera, sus empleados, funcionarios o agentes conozcan estas transacciones, deberán efectuar el registro en el formulario que determine la autoridad competente de cada Estado Parte.

En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las entidades de intermediación financiera definidas en el inciso a), del Artículo 10 y supervisadas por las autoridades bancarias o financieras nacionales, no se requerirá el registro en el formulario aludido en este Artículo.

Los registros deberán estar a disposición del tribunal o la autoridad competente, conforme al derecho interno de cada Estado Parte, para emplearlos en investigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según corresponda, con respecto a delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, o a la violación de este Convenio.

Cuando lo estime oportuno, la autoridad competente podrá establecer que las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio le presenten, dentro del plazo que ella fije, el formulario mencionado en esta Artículo. Este documento servirá como prueba o informe oficial y se utilizará para los fines señalados en el párrafo anterior.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, referidas en el párrafo precedente, no podrán poner en conocimiento da ninguna persona, selvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales internas de cada Estado Parte, que la información ha sido solicitada o proporcionada al tribunal o a la autoridad competente de cada Estado Parte.

Artículo 14 **Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas**

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a qua se refiera el Artículo 10 del presente Convenio, prestarán atención especial a las transacciones, efectuadas o pretendidas on cualquier forma sospechosa, a los patrones de transacción no habituales y a las transecciones no significativas pero periódicas, sin fundamento económico o legal evidente.

Esas entidades deberán comunicar, de inmediato, a las autoridades competentes la sospecha de que las transacciones puedan constituir actividades ilícitas o estar relacionadas con ellas.

Estas entidades no podrán poner en conocimiento de persona alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales internas de cada Estado Parte, el hecho de que ha solicitada o proporcionado la información al tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte.

Cuando la comunicación mencionade en el párrafo segundo de este Artículo sa efectúe conforme a derecho, las entidades de intermediación financiera y sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados por la legislación, estarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda, por el cumplimiento de este Artículo o por la revelación de información restringida por contrato o emanada de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera que sea el resultado de la comunicación.

Artículo 15
Responsabilidades de las Entidades de Intermediación Financiera y de las que Realicen Actividades Financieras

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando como tales, participen en delitos de lavado, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, estarán sujetos a sanciones más graves que las aplicables a particulares ajenos a estas entidades.

Estas entidades serán responsables, conforme al derecho interno de cada Estado Parte, por los actos de su personal, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando como tales, participen en la comisión de un delito previsto en el Artículo 2 de este Convenio.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pueda corresponderles a las personas indicadas en el párrafo anterior en relación con los delitos de lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, las entidades a que se refiere el Artículo 10 antes referido, serán responsables de acuerdo con el derecho interno de cada país, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Convenio.

Artículo 16
Programas de Cumplimiento Obligatorio por Parte de las Entidades de Intermediación Financiera y de las que Realicen Actividades Financieras

Para protegerse y detectar los delitos previstos en el Artículo 2 de este Convenio las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos.

Esos programas incluirán, como mínimo:

- a) Procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y un sistema para evaluar sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.
- b) Capacitación permanente al personal, e instrucción en cuanto a las responsabilidades señaladas en los Artículos del 10 al 13 de este Convenio.
- c) El mecanismo de auditoría independiente para verificar el cumplimiento de los programas.

Asimismo, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, antes referidas, deberán designar funcionarios gerenciales encargados de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas. Estos funcionarios servirán de enlace con las autoridades competentes.

CAPITULO IV DISPOSICIONES RECTORAS DE APLICACION DEL CONVENIO

Artículo 17 Obligaciones de las Autoridades Competentes

De acuerdo con el derecho interno de cada Estado Parte, las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las entidades de intermediación financiera, entre otras obligaciones, deberán:

- Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para operar entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiera el Artículo 10 del presente Convenio.
- b) Examinar, controlar o fiscalizar las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, relacionadas en el Artículo 10 de este Convenio y reglamentar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificación establecidas en el presente Convenio.
- c) Verificar, mediante exámenes regulares, que las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiera el Artículo 10 antes referido, posean y apliquen los programas de cumplimiento obligatorio, a que se refiera el Artículo 15 de este Convenio.
- d) Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de entidades de intermediación financiera y de las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 anteriormente mencionado, conforme a este Convenio, incluso las surgidas de un examen de cualquiera de ellas.
- e) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las entidades de intermediación financiera y a las que realicen actividades financieras, a que se refiera el Artículo 10 antes mencionado, a detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes. Estas pausas se desarrollarán tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de estas entidades.
- f) Cooperar con las autoridades competentes y aportarlas, en la medida de lo posible, asistencia técnica, en el marco de investigaciones y procesos referentes a los delitos contenidos en el Artículo 2 de este Convenio y con los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades para reglamentar y supervisar las entidades de intermediación financiera, conforme al derecho interno de cada Estado Parte, deberán poner en conocimiento con prontitud, de las otras autoridades competentes cualquier información, recibida de entidades de intermediación financiera, relativa a transacciones o actividades sospechosas que puedan relacionarse con los delitos estipulados en el Artículo 2 de este Convenio y los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las entidades de intermediación financiera, conforme al derecho de cada Estado Parte, deberán prestar estrecha cooperación a las autoridades competentes de otros Estados en investigaciones, procesos y actuaciones relacionados con los delitos citados en el Artículo 2 de este Convenio, los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y con las infracciones de las leyes o reglamentos administrativos aplicables a las entidades de intermediación financiera.

Artículo 18 **Cooperación Internacional**

Existirá cooperación entre los tribunales o las autoridades competentes de los Estados Parte, tomando las medidas apropiadas, a fin de prestarse asistencia en materia relacionada con delitos de lavado de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, conforme a este Convenio y dentro de los límites de sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte podrá, por la vía diplomática presentar o recibir una solicitud de su homólogo de otro Estado Parte para identificar, detectar, embargar o decomisar bienes, productos o instrumentos relacionados con delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y podrá tomar las medidas apropiadas, incluso lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de este Convenio.

Una resolución judicial o sentencia firme que condene al decomiso de bienes, productos o instrumentos, expedida por un tribunal competente de otro Estado Parte respecto al lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, podrá admitirse como prueba de que estos bienes, productos o instrumentos pueden estar sujetos a embargo, a medidas cautelares, o a decomiso según corresponda, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

El tribunal o autoridad competente podrá recibir por la vía diplomática una solicitud de un tribunal o autoridad competente de otro Estado Parte para prestar asistencia, sobre una investigación o proceso de carácter civil, penal o administrativo, según corresponda, referente a delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, o a violaciones de este Convenio.

Esta asistencia podrá incluir el suministro de originales o copias autenticadas de los documentos y registros pertinentes, comprendidos los de entidades de intermediación financiera, los de las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 del presente Convenio y entidades gubernamentales; la obtención de testimonios en el Estado Parte requerido; la facilitación de la presencia o disponibilidad voluntaria en el Estado Parte, requirente de personas para prestar declaración, incluso las detenidas; la localización o identificación de personas; la entrega de citaciones; el examen de objetos y lugares; la realización de inspecciones e incautaciones; la facilitación de información y elementos de pruebas y medidas cautelares.

La asistencia que se brinde para este Artículo se prestará conforme al derecho interno de cada Estado Parte y los instrumentos internacionales vigentes.

Artículo 19 Secreto o Reserva Bancaria

Las disposiciones legales referentes al secreto o la reserva bancaria no serán un impedimento para cumplir el presente Convenio, cuando la información sea solicitada o compartida por un tribunal o autoridad competente, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

CAPITULO V DISPOSICIONES FINALES

Artículo 20

Toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente Convenio, se decidirá por los medios pecíficos reconocidos por el Derecho Internacional.

Artículo 21

El presente Convenio será aprobado o ratificado por cada Estado Parte, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, será depositaria de los instrumentos de ratificación y adhesión del presente instrumento.

El presente Convenio tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los Estados que lo hayan ratificado, una vez que se haya depositado el tercer instrumento de ratificación, y a la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión para los demás Estados.

Artículo 22

El presente Convenio queda abierto a la adhesión de Belice, que también podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación.

Artículo 23

Este Convenio podrá modificarse por acuerdo entre las Partes, en virtud de protocolos de enmienda, los cuales entrarán en vigor en la misma forma prevista para el presente Convenio.

Artículo 24

En cualquier momento, cada Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. La denuncia recibida será notificada a todos los Estados Parte.

Para la Parte interesada, la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha, en que la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana haya recibido la notificación del Estado denunciante.

Artículo 25

El presente Convenio no admite reservas.

Artículo 25

El presente Convenio será registrado en la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 102 de la Carta de dicha Organización y en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

En fe de lo cual se firma el presente Convenio en la ciudad de Santo Domingo, a los seis (6) días del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y siete (1997), en nueve textos originales, siendo todos igualmente auténticos.



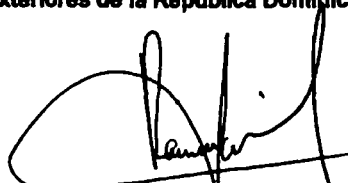
EDUARDO STEIN BARILLAS
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Guatemala



EDUARDO LATORRE
Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores de la República Dominicana



FERNANDO E. NARANJO
Ministro de Relaciones Exteriores
y Culto de la República de Costa Rica



RAMON E. GONZALEZ GINER
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de El Salvador



J. DELMER URBIZO
Secretario de Relaciones Exteriores
de la República de Honduras



EMILIO ALVAREZ MONTALVAN
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Nicaragua



RICARDO ALBERTO ARIAS
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República de Panamá

[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION BETWEEN CENTRAL AMERICA AND THE DOMINICAN
REPUBLIC FOR THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF THE
OFFENCES OF MONEY-LAUNDERING AND LAUNDERING OF
ASSETS CONNECTED TO ILLICIT DRUG TRAFFICKING AND
RELATED OFFENCES

The Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, and the Dominican Republic, hereinafter referred to as "the Parties",

Considering:

That the offences of money-laundering and the laundering of assets connected to illicit drug-trafficking and related offences are a serious social scourge that should be prevented and suppressed;

That the perpetration of the offences of money-laundering and laundering of assets derived from criminal activity invariably leads to a breakdown of social, political and economic structures;

That the proceeds of such activities generate distortions and unfair competition for the legitimate economies of the Central American countries and the Dominican Republic;

That the ultimate aim of such criminal activities is to consolidate the profits derived therefrom through the use of mechanisms for legitimizing assets;

The provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, signed in Vienna, Austria, on 20 December 1988 and in force since 11 November 1990; the mandate contained in the Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences, adopted by the General Assembly of the Organization of American States (OAS); and the Model Law on Money-Laundering, Confiscation and International Cooperation in Relation to Drugs, issued by the United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) in November 1995;

The joint initiatives of the United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) of the Organization of American States (OAS), the Central American Permanent Commission for the Eradication of the Illicit Production, Traffic, Consumption and Use of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, and the United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (ILANUD), which led to the establishment of the regional Centre for Legal Cooperation and Development in Central America (CEDEJU), on the control of drug production and trafficking;

That one of the main objectives of CEDEJU is to promote the harmonization of the laws of the Central American countries with the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and the model law recommended by UNDCP; and

The importance of using, as a frame of reference, the Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences;

Therefore:

Have decided to sign this Convention.

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. General Concepts

For the purpose of this Convention, the following definitions shall apply:

(1) **Property:** Assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, which are subject to ownership and economic valuation, as well as legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets.

(2) **Convention:** United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, signed in Vienna, Austria, on 20 December 1988, which entered into force on 11 November 1990.

(3) **Confiscation:** Permanent loss of property, instrumentalities and items derived from the commission of an offence, by decision of a competent judicial authority in accordance with article 1, letter (l), of the Convention.

(4) **Freezing:** Temporarily prohibiting the transfer, transformation, conversion, disposition, encumbrance or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority, to guarantee the payment of compensation or civil damages arising from the offence.

(5) **Instrumentalities:** Items used or designed or intended for use in any manner in the commission of illicit drug trafficking and related offences.

(6) **Person:** Any entity, natural or juridical, capable of acquiring rights and entering into obligations. For the purposes of this Convention, both shall incur responsibility and be subject to punishment.

(7) **Proceeds:** Any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of illicit drug trafficking and related offences.

(8) **Illicit traffic:** The offences set forth in article 3, paragraphs 1 and 2, of the Convention.

(9) **Financial intermediation entities authorized under the domestic law of each State Party:**

(a) Commercial banks and financial institutions, trust companies, insurance and re-insurance companies, savings and loan associations, building and loan associations, savings banks, industrial banks, credit unions and other savings, loan or debit institutions or establishments;

(b) Brokers or dealers in securities;

(c) Currency dealers or exchangers;

(d) Other similar entities.

Article 2. Laundering Offences and Offences Involving Assets Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offences

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish the following as criminal offences under its domestic law:

(1) Converting or transferring resources or property, knowing that they are derived directly or indirectly from illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or from related offences, for the purpose of concealing or disguising their illicit origin or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence to evade the legal consequences of his or her actions;

(2) Helping to conceal or disguise the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of resources or property, knowing that they are derived directly or indirectly from illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or from related offences;

(3) Acquiring, possessing or using property, knowing that it was derived from illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or from related offences or participation in such an offence.

Penalties for each offence shall be established by each State Party in accordance with its domestic law and taking into consideration the penalties established by the other States Parties.

Likewise, more severe penalties shall be established for the commission of such offences by civil servants and public officials.

Article 3. Jurisdiction

The offences referred to in article 2 of this Convention shall be investigated, tried, judged and sentenced by a competent authority or court under the domestic law of each State, regardless of whether or not the illicit drug trafficking or related offences were committed in another territorial jurisdiction, without prejudice to extradition in accordance with the domestic law of each State Party.

CHAPTER II. PROPERTY, PROCEEDS AND INSTRUMENTALITIES

Article 4. Preventive Measures relating to Property, Proceeds or Instrumentalities

In accordance with the domestic law of each State Party, the court or other competent authority shall order, at any time, preventive or provisional measures intended to preserve the availability of property, proceeds or instrumentalities derived from money-laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences.

Article 5. Forfeiture of Property or Instrumentalities

When a person is convicted of a money-laundering offence connected to illicit drug trafficking and related offences, the court shall order that the property, proceeds or instru-

mentalities connected to such an offence be forfeited and disposed of in accordance with the domestic law of each State Party.

Article 6. Bona Fide Third Parties

The measures and sanctions referred to in articles 4 and 5 shall apply without prejudice to the rights of bona fide third parties.

In accordance with the domestic law of each State Party, proper notification shall be made so that those claiming a legitimate interest in property, proceeds or instrumentalities may appear in support of their claims. The legal system of each State Party shall consider the most expeditious and effective means of notification, depending on whether or not the property is registrable.

In accordance with the domestic law of each State Party, the court or other competent authority shall return the property, proceeds or instrumentalities to the claimant, when it has been demonstrated to its satisfaction that:

(1) The claimant has a legitimate right to the property, proceeds or instrumentalities, and no participation, collusion or involvement with respect to laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences which are the object of the proceedings can be imputed to the claimant; and

(2) The claimant did all that could reasonably be expected to prevent the illegal use of the property, proceeds or instrumentalities.

Article 7. Disposition of Property, Proceeds or Instrumentalities subject to Preventive Measures

Each State Party may, if its domestic law so allows:

(1) Authorize the authorities responsible for preventing, controlling, addressing and punishing the offences referred to in this Convention to make use of the property, proceeds or instrumentalities, while safeguarding the State's obligation to guarantee their due preservation.

The States Parties shall take appropriate measures to meet the costs of using and maintaining the items seized.

(2) Grant, when circumstances so warrant, the authorization referred to in the preceding paragraph to a bona fide third party or to the duly established owner of the property, proceeds or instrumentalities seized.

Article 8. Disposition of Forfeited Property, Proceeds or Instrumentalities

When property, proceeds or instrumentalities that are not required to be destroyed and that are not harmful to the public are forfeited under article 5 of this Convention, the competent authority may sell them, use them for official purposes or transfer them to the appropriate government agencies, according to the domestic law of each State Party.

Article 9. Property, Proceeds or Instrumentalities of Foreign Offences

The court or other competent authority may order, in accordance with the domestic law of each State Party, the seizure or other preventive measure in respect of property, proceeds or instrumentalities in its territorial jurisdiction when they are connected to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences committed against the laws of another country, and when such offences would have been offences if committed within its jurisdiction.

CHAPTER III. FINANCIAL INTERMEDIATION ENTITIES AND FINANCIAL ACTIVITIES

Article 10. Financial Institutions and Activities

Financial intermediation entities and entities engaged in financial activities shall be regulated by the competent authorities of the States Parties, as shall persons who carry out the following activities:

- (a) Systematic or substantial cashing of cheques;
- (b) Systematic or substantial operations involving the issuance, sale or redemption of travellers' cheques or money orders;
- (c) Systematic or substantial transmitting of funds by any means; and
- (d) Other activities involving financial intermediation, as well as the issuance, use or supervision of negotiable instruments or financial claims.

Article 11. Identification of Clients and Transmittal of Records

In States Parties with numbered or anonymous accounts or accounts operated through individual or corporate nominees, the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the preceding article shall be obligated to know the true identity of the holders of such accounts so that they may supply this information to regulatory authorities in investigations on the matters covered by this Convention.

Such entities shall record and verify, by reliable means, the identity, representative capacity, domicile, legal capacity, occupation or business purpose of persons, whether they be occasional or usual clients, through the use of identity documents, passports, birth certificates, driver's licences, partnership contracts and incorporation papers or any other official or private documents, when initiating business relations, especially when opening new accounts or passbooks, entering into fiduciary transactions, renting safe deposit boxes or performing cash transactions over an amount specified by the competent authority of each State Party.

Financial intermediation entities and entities engaged in the above-mentioned financial activities shall take reasonable measures to obtain and maintain information about the true identity of the person on whose behalf an account is opened or a transaction is conducted, if there are any doubts that a client is acting on his or her own behalf, particularly in the case of a juridical person which is not conducting any commercial, financial or industrial operations in the State where it has its headquarters or domicile.

During an operation and for at least five years after the conclusion of a transaction, the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the preceding article shall maintain records of the information and documentation required under this article. They shall also maintain records on customer identification, account files and business correspondence, as determined by the competent authority, for at least five years after the account has been closed.

Such entities shall also maintain records which may be used to reconstruct financial transactions in excess of an amount specified by the competent authority in each State Party for at least five years after the conclusion of the transaction.

Article 12. Availability of Records

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall comply promptly, and within the period of time to be established, with information requests from the competent authorities concerning the information and documentation referred to in the preceding article. These data shall be used in criminal, civil or administrative investigations, prosecutions or proceedings, as the case may be, regarding illicit drug trafficking and related offences or violations of the provisions of this Convention.

The competent authorities of one State may share information with the competent authorities of other States, in accordance with the domestic law of each State Party.

Article 13. Recording and Reporting of Cash Transactions

The financial institutions and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall record, on a form designed by the competent authority of each State Party, each cash transaction in domestic or foreign currency exceeding an amount specified by the said authority. The form shall include, at a minimum, the following data for each transaction:

- (a) The identity, signature and address of the person who physically conducts the transaction;
- (b) The identity and address of the person in whose name the transaction is conducted;
- (c) The identity and address of the beneficiary or the person on whose behalf the transaction is conducted, where applicable;
- (d) The identity of the accounts affected by the transaction, if any;
- (e) The type of transaction involved, such as deposit, withdrawal, currency exchange, cheque cashing, purchase of certified or cashier's cheques or money orders or other payments or transfers by or through such financial institution;
- (f) The identity of the financial institution where the transaction occurred; and
- (g) The date, time and amount of the transaction.

This record shall be drawn up accurately and completely by the financial institution on the day of the transaction, and shall be maintained for a period of five years from the date of the transaction.

Multiple cash transactions in domestic or foreign currency which, taken together, exceed a specified amount shall be treated as a single transaction if they are undertaken by or on behalf of any one person during any one day or any other period established by the competent authority. When a financial institution or its employees, officers or agents have knowledge of these transactions, they shall record them on the form determined by the competent authority of each State Party.

For transactions conducted on their own account between the financial intermediation entities defined in article 10, letter (a), that are subject to supervision by the domestic banking and financial authorities, recording on the form referred to in this article shall not be required.

The records shall be available to the court or other competent authority, in accordance with the domestic law of each State Party, for use in criminal, civil or administrative investigations, prosecutions or proceedings, as the case may be, in relation to money-laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences or violations of this Convention.

When it deems advisable, the competent authority may establish that the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention file with it, within such time as it may establish, the form referred to in this article. This document shall serve as evidence or as an official report, and shall be used for the purposes mentioned in the preceding paragraph.

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the preceding paragraph shall not notify any person, other than a court, competent authority or other person authorized by the domestic legal provisions of each State Party, that such information has been requested by or furnished to a court or other competent authority of a State Party.

Article 14. Reporting of Suspicious Financial Transactions

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall pay special attention to transactions effected or attempted in any suspicious manner and to unusual patterns of transactions, and to insignificant but periodic transactions which have no apparent economic or lawful purpose.

Such entities shall promptly report to the competent authorities any suspicion that the transactions could constitute or be related to illicit activities.

Such entities shall not notify any person, other than a court, competent authority or other person authorized by the domestic legal provisions of each State Party, that such information has been requested by or furnished to a court or other competent authority of a State Party.

When the report referred to in the second paragraph of this article is effected in a lawful manner, the financial intermediation entities and their employees, staff, directors, owners

or other representatives as authorized by law shall be exempted from criminal, civil and administrative liability, as the case may be, for complying with this article or for breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, regardless of the result of the report.

Article 15. Liability of Financial Intermediation Entities and Entities Engaged in Financial Activities

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention, their employees, staff, directors, owners or other authorized representatives who, acting as such, participate in laundering offences, illicit drug trafficking and related offences shall be subject to sanctions more severe than those applicable to individuals not connected to such entities.

Such entities shall be liable, in accordance with the domestic law of each State Party, for the actions of their employees, staff, directors, owners or other authorized representatives who, acting as such, participate in the commission of any offence referred to in article 2 of this Convention.

Without prejudice to the criminal or civil liability which may be incurred by the persons referred to in the preceding paragraph in relation to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences, the entities referred to in the above-mentioned article 10 shall incur liability in accordance with the domestic law of each country for non-compliance with the obligations laid down in this Convention.

Article 16. Mandatory Compliance Programmes in Financial Intermediation Entities and Entities Engaged in Financial Activities

To protect themselves and to detect the offences referred to in article 2 of this Convention, the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall adopt, develop and implement internal programmes, policies, procedures and controls.

Such programmes shall include, at a minimum:

- (a) Procedures to ensure high standards of integrity of their employees and a system for evaluating the personal, employment and financial history of these employees;
- (b) Ongoing employee training and instruction on the responsibilities laid down in articles 10 to 13 of this Convention;
- (c) An independent audit mechanism to verify the implementation of programmes.

The above-mentioned financial intermediation entities and entities engaged in financial activities shall also designate compliance officers at management level in charge of the application of internal programmes and procedures, including the proper maintenance of records and reporting of suspicious transactions. These officers shall function as liaison with the competent authorities.

CHAPTER IV. PROVISIONS GOVERNING THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION

Article 17. Obligations of the Competent Authorities

In accordance with the domestic law of each State Party, the competent authorities, and especially those with regulatory and supervisory power over financial intermediation entities shall, among other obligations:

(a) Grant, deny, suspend or cancel licences or permits to operate the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention;

(b) Examine and supervise the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention, and regulate their effective compliance with the record-keeping and reporting obligations specified in this Convention;

(c) Verify, through regular examinations, that the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the above-mentioned article 10 have and apply the mandatory compliance programmes referred to in article 15 of this Convention;

(d) Provide other competent authorities with the information obtained from the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the above-mentioned article 10 in conformity with this Convention, including information resulting from an examination of any such entity;

(e) Prescribe instructions or recommendations to assist the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the above-mentioned article 10 in detecting suspicious patterns of behaviour in their clients. These guidelines shall be developed taking into account modern and secure techniques of money management and shall serve as an educational tool for the employees of such entities;

(f) Cooperate with the competent authorities and provide them, to the extent possible, with technical assistance in investigations, prosecutions or proceedings relating to the offences referred to in article 2 of this Convention, other offences involving illicit drug trafficking and related offences.

The competent authorities, and especially those with regulatory and supervisory power over financial intermediation entities under the domestic law of each State Party shall report promptly to other competent authorities any information received from financial intermediation entities concerning suspicious transactions or activities that could be related to the offences referred to in article 2 of this Convention, other offences involving illicit drug trafficking and related offences.

The competent authorities, and especially those with regulatory and supervisory power over financial intermediation entities under the domestic law of each State Party shall cooperate closely with the competent authorities of other States in investigations, proceedings or prosecutions relating to the offences referred to in article 2 of this Convention, other offences involving illicit drug trafficking and related offences and violations of the laws and administrative regulations applicable to financial intermediation entities.

Article 18. International Cooperation

The courts or other competent authorities of the States Parties shall cooperate with each other, taking appropriate measures to provide assistance in matters concerning laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences, in accordance with this Convention and within the limits of their respective legal systems.

The court or other competent authority of each State Party may submit or receive, through the diplomatic channel, a request to or from its counterpart in another State Party to identify, trace, seize or confiscate property, proceeds or instrumentalities connected to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences, and may take appropriate actions, including those provided for in articles 4 and 5 of this Convention.

A final judicial decision or judgement that provides for the forfeiture of property, proceeds or instrumentalities, issued by a competent court of another State Party in respect of the laundering of money derived from illicit drug trafficking and related offences may be recognized as evidence that such property, proceeds or instrumentalities may be subject to seizure, preventive measures or forfeiture, as appropriate, in accordance with the domestic law of each State Party.

The court or other competent authority may receive, through the diplomatic channel, a request from a court or other competent authority in another State Party to provide assistance in relation to a civil, criminal or administrative investigation, prosecution or proceeding, as the case may be, in relation to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences or violations of this Convention.

Such assistance may include providing originals or certified copies of relevant documents and records, including those of the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention, and government agencies; obtaining testimony in the requested State Party; facilitating the voluntary presence or availability in the requesting State Party of persons, including those in custody, to give testimony; locating or identifying persons; serving of documents; examining objects and places; carrying out searches and seizures; providing information and evidentiary items; and provisional measures.

Assistance provided under this article shall be undertaken in accordance with the domestic law of each State Party and the international instruments in force.

Article 19. Bank Secrecy or Confidentiality

The legal provisions referring to bank secrecy or confidentiality shall not be an impediment to compliance with this Convention when the information is requested by or shared with the court or other competent authority in accordance with the domestic law of each State Party.

CHAPTER V. FINAL PROVISIONS

Article 20

Any dispute concerning the application or interpretation of this Convention shall be settled by peaceful means recognized by international law.

Article 21

This Convention shall be adopted or ratified by each State Party in accordance with its respective constitutional procedures.

The General Secretariat of the Central American Integration System shall serve as depositary of the instruments of ratification of and accession to this Convention.

This Convention shall remain in force indefinitely and shall enter into force, for the States having ratified it, once the third instrument of ratification has been deposited, and, for the remaining States, on the date of deposit of their respective instruments of ratification or accession.

Article 22

This Convention shall be open to accession by Belize, which may also negotiate an association or relationship agreement.

Article 23

This Convention may be amended, by agreement between the Parties, through amending protocols, which shall enter into force in the same manner as this Convention.

Article 24

Any State Party may denounce this Convention at any time by providing written notice thereof to the General Secretariat of the Central American Integration System. All States Parties shall be notified of the receipt of such a denunciation.

For the Party concerned, the denunciation shall take effect one year after the date on which the General Secretariat of the Central American Integration System receives the notice of denunciation.

Article 25

Reservations shall not be permitted in respect of this Convention.

Article 26

This Convention shall be registered with the United Nations Secretariat in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations, and with the General Secretariat of the Organization of American States.

In witness whereof this Convention has been signed in Santo Domingo on 6 November 1997 in nine original copies, all equally authentic.

EDUARDO STEIN BARILLAS

Minister for Foreign Affairs of the Republic of Guatemala

FERNANDO E. NARANJO

Minister for Foreign Affairs and Worship of the Republic of Costa Rica

J. DELMER URBIZO

Minister for Foreign Affairs of the Republic of Honduras

EDUARDO LATORRE

Minister for Foreign Affairs of the Dominican Republic

RAMON E. GONZALEZ GINER

Minister for Foreign Affairs of the Republic of El Salvador

EMILIO ALVAREZ MONTALVAN

Minister for Foreign Affairs of the Republic of Nicaragua

RICARDO ALBERTO ARIAS

Minister for Foreign Affairs of the Republic of Panama

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD ENTRE L'AMÉRIQUE CENTRALE ET LA RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES
CRIMES DE BLANCHIMENT D'ARGENT ET D'AVOIRS LIÉS AU
TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET AUX CRIMES CONNEXES

Les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama et la République dominicaine, ci-après dénommées " les Parties ",

Considérant :

Que les crimes de blanchiment d'argent et d'avoirs liés au trafic illicite de stupéfiants et aux crimes connexes constituent un grave fléau social qu'il importe de prévenir et de réprimer;

Que le processus sur lequel reposent les crimes de blanchiment d'argent et d'avoirs provenant d'activités criminelles entraîne toujours une érosion des structures sociales, politiques et économiques;

Que l'argent provenant desdites activités est une source de distorsions et de concurrence déloyale pour les économies légitimes des pays centraméricains et de la République dominicaine;

Que le but ultime de ces activités criminelles est de consolider leurs produits grâce au recours à des mécanismes tendant à légitimer des capitaux;

Les dispositions de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne (Autriche) le 20 décembre 1988, en vigueur depuis le 11 novembre 1990; les dispositions du Règlement type relatif aux crimes de blanchiment d'argent lié au trafic illicite de stupéfiants et aux crimes connexes, adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains (OEA), et la Loi type relative au blanchiment d'argent et à la confiscation du produit d'activités liées au trafic de stupéfiants, élaborée par le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) en novembre 1995;

Les initiatives conjointes en matière de contrôle de la production et du trafic de drogues du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD) de l'Organisation des États américains, de la Commission permanente centraméricaine pour l'élimination de la production, du trafic et de l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes et des crimes connexes et de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD), qui ont débouché sur la création du Centre régional de développement et de coopération juridiques en Amérique centrale;

Que l'un des principaux objectifs du Centre régional de développement et de coopération juridiques en Amérique centrale est de promouvoir l'harmonisation des législations des pays d'Amérique centrale, d'une part, et la Convention des Nations Unies contre le trafic

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et la Loi type élaborée par le PNUCID, d'autre part; et

Qu'il importe de prendre comme cadre de référence le Règlement type relatif aux crimes de blanchiment d'argent lié au trafic illicite de stupéfiants et aux crimes connexes.

Sont convenus de conclure le présent Accord.

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par :

1) "Biens" : les actifs de tout type, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, pouvant faire l'objet d'une propriété et dotés d'une valeur économique, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs.

2) "Convention" : la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne (Autriche) le 20 décembre 1988, entrée en vigueur le 11 novembre 1990.

3) "Confiscation" : la dépossession permanente de biens, d'instruments et d'effets provenant de la commission d'un délit, sur décision d'une autorité judiciaire compétente, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

4) "Saisie conservatoire" : l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition, de la mise en gage ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'une juridiction ou autre autorité compétente, afin d'assurer l'indemnisation ou la réparation des préjudices causés par le crime.

5) "Instrument" : toute chose utilisée, destinée à être utilisée ou que l'on a l'intention d'utiliser, de quelque manière que ce soit, pour commettre des crimes liés au trafic illicite de drogues et de crimes connexes.

6) "Personne" : toute personne physique ou morale ayant la capacité d'acquérir des droits et de contracter des obligations. Aux fins du présent Accord, l'une et l'autre peuvent encourir une responsabilité et faire l'objet de sanctions.

7) "Produit" : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'un crime lié au trafic illicite de drogues ou d'un crime connexe.

8) "Trafic illicite" : les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Convention.

9) "Intermédiaires financiers autorisés par la législation interne de chaque État partie" :

a) Les banques commerciales et les établissements financiers, les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance et de réassurance, les sociétés d'épargne et de crédit, les caisses d'épargne, les banques industrielles, les mutuelles de crédit et autres institutions ou établissements d'épargne, de crédit ou de débit;

b) Les maisons de courtage et les établissements d'intermédiation pour la négociation de valeurs;

c) Les cambistes et bureaux de change;

d) Les autres organismes de même nature.

Article 2. Crimes de blanchiment d'argent et d'avoirs liés au trafic illicite de drogues et crimes connexes

Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour criminaliser au regard de son droit interne le fait de :

1) Convertir ou transférer des ressources ou des biens en sachant qu'ils proviennent directement ou indirectement soit du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes soit de crimes connexes, afin de déguiser ou de dissimuler leur origine illicite ou d'aider celui qui a participé à la commission de l'un de ces crimes à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.

2) Contribuer à déguiser ou à dissimuler la nature ou l'origine, l'emplacement, la destination, le mouvement ou la propriété réelle des ressources ou des biens ou des droits y relatifs, en sachant qu'ils proviennent directement ou indirectement soit du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes soit de crimes connexes.

3) Acquérir, posséder ou utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent soit du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes soit de crimes connexes, soit de la participation à l'un de ces crimes.

Les sanctions réprimant chacune de ces infractions sont déterminées par chaque État partie en application de sa législation nationale et en prenant en considération les sanctions établies par les autres États parties.

Le fait que l'auteur de ces infractions soit un fonctionnaire ou un agent public constitue une circonstance aggravante.

Article 3. Compétence

Sous réserve des dispositions relatives à l'extradition prévues par la législation nationale de chaque État partie, l'autorité ou la juridiction compétente en application du droit interne de chaque État partie est habilitée à connaître des infractions définies à l'article 2 du présent Accord, sans égard au fait que le trafic illicite de stupéfiants ou les infractions connexes aient été commis dans un autre ressort territorial.

CHAPITRE II. BIENS, PRODUITS ET INSTRUMENTS

Article 4. Mesures conservatoires relatives aux biens, produits ou instruments

La juridiction ou l'autorité compétente peut prendre à tout moment, en application du droit interne de chaque État partie, des mesures conservatoires visant à préserver les biens, produits ou instruments provenant de crimes de blanchiment d'argent liés au trafic illicite de stupéfiants ou de crimes connexes.

Article 5. Confiscation de biens ou d'instruments

Lorsqu'une juridiction prononce une condamnation pour crime de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de stupéfiants ou de crimes connexes, elle ordonne la confiscation des biens, produits et instruments liés auxdits crimes, dont il est ensuite disposé en application du droit interne de chaque État partie.

Article 6. Tiers de bonne foi

Les mesures et sanctions prévues aux articles 4 et 5 du présent Accord s'appliquent sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Lesdites mesures et sanctions sont dûment notifiées en application du droit interne de chaque État partie afin que toute personne pouvant alléguer un intérêt légitime sur les biens, produits ou instruments puisse comparaître pour faire valoir ses droits. Les modalités de notification les plus rapides et les plus efficaces, selon qu'il s'agit de biens sujets ou non à enregistrement, sont déterminées par la législation nationale de chacun des États parties.

La juridiction ou l'autorité compétente restitue au requérant, en application du droit interne de chaque État partie, les biens, produits ou instruments dès lors qu'il est établi :

- 1) Que le requérant a un droit légitime sur les biens, produits ou instruments;
- 2) Qu'il ne peut être imputé au requérant aucun type de participation, de collusion ou d'implication dans des crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes faisant l'objet de la poursuite; et
- 3) Que le requérant a pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher que les biens, produits ou instruments en cause ne soient utilisés de façon illicite.

Article 7. Disposition des biens, produits ou instruments faisant l'objet de mesures conservatoires

Dans la mesure où son droit interne le permet, chaque État partie :

- 1) Peut autoriser les autorités chargées de prévenir, combattre et réprimer les infractions visées au présent Accord à utiliser les biens, produits ou instruments faisant l'objet de mesures conservatoires, sous réserve de l'obligation d'en garantir la préservation par l'État.

Les États parties adoptent les mesures voulues pour prendre en charge les frais afférents à l'utilisation et à l'entretien des biens, produits ou instruments saisis à titre conservatoire.

- 2) Peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder l'autorisation prévue à l'alinéa précédent au tiers de bonne foi ou au propriétaire dûment accrédité du bien, produit ou instrument saisi à titre conservatoire.

Article 8 Disposition des biens, produits ou instruments confisqués

L'autorité compétente peut ordonner que les biens, produits ou instruments confisqués comme le prévoit l'article 5 du présent Accord, s'ils ne doivent pas être détruits et s'ils ne

sont pas dommageables pour la population, soient aliénés, affectés à un usage officiel ou transférés aux organismes publics compétents, comme en dispose le droit interne de chaque État partie.

Article 9. Biens, produits ou instruments liés à des infractions commises à l'étranger

La juridiction ou l'autorité compétente peut ordonner, en application du droit interne de chaque État partie, la saisie ou toute autre mesure conservatoire à l'égard des biens, produits ou instruments qui, situés dans son ressort territorial, sont liés à des crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes commis en infraction à la législation d'une autre pays, dans tous les cas où lesdits crimes, s'ils avaient été commis dans le ressort territorial de cette juridiction ou autorité compétente, auraient également été qualifiés comme tels.

CHAPITRE III. INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Article 10. Établissements financiers et activités financières

Les intermédiaires et établissements financiers sont assujettis au contrôle des autorités compétentes des États parties. Sont également assujetties à ce contrôle les personnes qui se livrent aux activités ci-après :

- a) Opérations régulières ou substantielles d'encaissement de chèques;
- b) Opérations régulières ou substantielles d'émission, de vente ou d'encaissement de chèques de voyage ou de virements postaux;
- c) Virements réguliers ou substantiels de fonds, par quelque moyen que ce soit; et
- d) Autres activités d'intermédiation financière, ainsi que l'émission, l'administration ou la garde d'instruments ou d'effets de crédit.

Article 11

Dans les États parties où existent des comptes numériques, des comptes anonymes ou d'autres comptes administrés sous mandat civil ou commercial, les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article précédent sont tenus de s'enquérir de l'identité véritable des titulaires de tels comptes afin de pouvoir la communiquer aux autorités de contrôle aux fins des enquêtes relatives aux matières régies par le présent Accord.

Lesdits intermédiaires et établissements financiers doivent également enregistrer et vérifier par des moyens dignes de foi l'identité, la qualité de mandataire, le domicile, la capacité juridique, la profession ou la branche d'activités économiques de leurs clients occasionnels ou habituels moyennant la production de pièces d'identité, passeports, extraits d'actes de naissance, permis de conduire, actes constitutifs ou statuts, ou de toute autre pièce officielle ou privée, lorsqu'ils établissent des relations commerciales, notamment l'ouverture de nouveaux comptes, la délivrance de livrets de dépôt, la réalisation d'opération de fiducie, la location de coffres-forts ou les opérations en espèces liquides d'un montant supérieur au plafond fixé par l'autorité compétente de chaque État partie.

Les intermédiaires et établissements financiers dont il est question ci-dessus doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir et conserver des renseignements établissant l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération est effectuée, dans tous les cas où il y a lieu de douter qu'un client n'agit pas pour son propre compte, en particulier lorsque ce client est une personne morale qui ne se livre à aucune opération commerciale, financière ou industrielle dans le territoire de l'État ou elle est établie ou domiciliée.

Les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article précédent doivent conserver dans leurs registres, pendant toute la durée de l'opération et au moins cinq ans par la suite, les renseignements et les pièces mentionnés dans ledit article. Ils doivent en outre conserver, pendant au moins cinq ans après la clôture d'un compte, les registres contenant l'identité de leur client, les relevés dudit compte et la correspondance commerciale, selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.

Lesdits intermédiaires et établissements financiers doivent en outre tenir des registres permettant de reconstituer les opérations financières d'un montant supérieur au plafond fixé par l'autorité compétente de chaque État partie, pendant au moins cinq ans après la conclusion de ces opérations.

Article 12. Consultation des registres

Les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord doivent donner suite sans tarder et dans le délai imparti aux demandes qui leur sont adressées par les autorités compétentes au sujet des renseignements et des pièces visés à l'article précédent. Ces renseignements sont utilisés aux fins des enquêtes et actions pénales, civile ou administratives, selon le cas, concernant les crimes liés au trafic illicite de drogues et les crimes connexes ou à des violations des dispositions du présent Accord.

Les autorités compétentes d'un État peuvent communiquer lesdits renseignements aux autorités compétentes d'autres États, comme en dispose le droit interne de chaque État partie.

Article 13. Enregistrement et déclaration d'opérations en espèces liquides

Les intermédiaires et établissement financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord doivent enregistrer sur un formulaire établi par l'autorité compétente de chaque État partie chaque opération effectuée en espèces liquides, en monnaie nationale ou en devises, dont le montant est supérieur au plafond fixé par ladite autorité. Le formulaire doit contenir au moins les renseignements suivants pour chaque opération :

- a) L'identité, la signature et l'adresse de la personne réalisant matériellement l'opération;
- b) L'identité et l'adresse de la personne au nom de laquelle l'opération est réalisée;
- c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ou destinataire de l'opération, le cas échéant;
- d) L'intitulé des comptes concernés par l'opération, s'il y a lieu;

e) Le type d'opération dont il s'agit : dépôt, retrait de fonds, change de devises, encaissement de chèque, achat de chèque visé ou de chèque bancaire, ordre de paiement ou virement effectué par l'établissement financier ou par son intermédiaire;

f) L'identité de l'établissement financier où l'opération est réalisée;

g) La date, l'heure et le montant de l'opération.

L'établissement financier doit établir le formulaire de façon précise et complète le jour où l'opération est effectuée et le conserver pendant cinq ans à compter de cette date.

Les opérations multiples en espèces liquides, en monnaie nationale ou en devises, dont le montant global est supérieur au plafond fixé par l'autorité compétente, sont considérées comme constituant une même opération si elles sont effectuées par une même personne ou pour son compte, le même jour ou dans tout autre délai fixé par l'autorité compétente. L'établissement financier ainsi que ses employés, préposés ou agents, dès lors qu'ils ont connaissance de telles opérations, doivent les enregistrer sur le formulaire établi par l'autorité compétente de chaque État partie.

Les opérations effectuées pour compte propre entre des intermédiaires financiers dont il est question à l'alinéa a) de l'article 10, qui sont supervisés par les autorités bancaires ou financières nationales, ne donnent pas lieu à l'établissement du formulaire visé au présent article.

Les registres doivent être tenus à la disposition de la juridiction ou de l'autorité compétente, comme en dispose le droit interne de chaque État partie, afin que les renseignements qui y sont consignés puissent être exploités aux fins d'enquêtes et d'actions pénales, civiles ou administratives, selon le cas, concernant des crimes de blanchiment d'argent liés au trafic illicite de stupéfiants ou des crimes connexes ou à des violations des dispositions du présent Accord.

L'autorité compétente peut, lorsqu'elle le juge opportun, exiger que les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord lui soumettent, dans les délais qu'elles déterminent, le formulaire visé au présent article. Cette pièce est utilisée comme élément de preuve ou comme déclaration officielle aux fins mentionnées à l'alinéa précédent.

Les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'alinéa précédent ne doivent informer personne, si ce n'est la juridiction ou l'autorité compétente, ou toute autre personne autorisée par les dispositions du droit interne de chaque État partie, que des renseignements ont été demandés par la juridiction ou par l'autorité compétente dudit État et leur ont été fournis.

Article 14. Déclarations d'opérations financières suspectes

Les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord doivent porter une attention particulière aux opérations effectuées ou tentées de façon suspecte, aux opérations sortant de l'ordinaire et aux opérations peu importantes mais régulières et dépourvues de fondement économique ou juridique manifeste.

Lesdits intermédiaires et établissements financiers doivent communiquer immédiatement aux autorités compétentes leurs soupçons quant aux opérations qui pourraient constituer ou concerner des activités illicites.

Lesdits intermédiaires et établissements financiers ne doivent informer personne, si ce n'est la juridiction ou l'autorité compétente, ou toute autre personne autorisée par les dispositions du droit interne de chaque État partie, que des renseignements ont été demandés par la juridiction ou par l'autorité compétente dudit État et leur ont été fournis.

Lorsque les soupçons dont il est question au deuxième alinéa du présent article sont communiqués à bon droit, les intermédiaires financiers et leurs employés, préposés, administrateurs, propriétaires et autres représentants autorisés par la loi n'encourent aucune responsabilité pénale, civile ou administrative, selon le cas, du fait de l'application dudit article ou de la révélation de renseignements qui sont confidentiels aux termes de dispositions contractuelles, juridiques, réglementaires ou administratives, quel que soit le résultat de la communication.

Article 15. Responsabilités des intermédiaires et établissements financiers

Les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord, ainsi que leurs employés, préposés, administrateurs, propriétaires et autres représentants autorisés qui, agissant *ès qualités*, participent à des crimes de blanchiment d'argent ou de trafic illicite de drogues, ou à des crimes connexes, sont passibles de peines plus graves que celles qui sont applicables aux personnes étrangères à ces intermédiaires et établissements.

Lesdits intermédiaires et établissements financiers sont responsables, en application du droit interne de chaque État partie, des actes des membres de leur personnel, préposés, administrateurs, propriétaires et autres représentants autorisés qui, agissant *ès qualités*, participent à la commission de l'une des infractions définies à l'article 2 du présent Accord.

Sans préjudice de la responsabilité pénale ou civile que peuvent encourir les personnes dont il est question à l'alinéa précédent du chef de crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de stupéfiants ou de crimes connexes, les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord sont responsables, en application du droit interne de chaque pays, de l'inobservation des obligations prévues dans le présent Accord.

Article 16. Programmes obligatoires pour les intermédiaires et établissements financiers

Afin de se protéger et de détecter les infractions définies à l'article 2 du présent Accord, les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord doivent adopter, élaborer et mettre en oeuvre des programmes, normes, procédures et contrôles internes.

Ces programmes comprennent au moins :

a) Des procédures garantissant que les membres du personnel satisfont à des normes strictes d'intégrité, assorties d'un système d'évaluation de leurs antécédents individuels et professionnels et de l'état de leur fortune;

b) Un programme permanent de formation du personnel et d'instruction quant aux responsabilités dont il est question aux articles 10 à 13 du présent Accord;

c) Un mécanisme d'audit indépendant afin de vérifier le respect des programmes.

En outre, les intermédiaires et établissements financiers susmentionnés doivent désigner des cadres chargés de veiller au respect des programmes et procédures internes, notamment en tenant des registres appropriés et en déclarant les opérations suspectes. Ces cadres assurent la liaison avec les autorités compétentes.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Article 17. Obligations des autorités compétentes

Les autorités compétentes, en particulier celles qui sont dotées de pouvoirs de réglementation et de supervision sur les intermédiaires financiers, doivent notamment, en application du droit interne de chaque État partie :

a) Octroyer, refuser, suspendre ou annuler les autorisations et permis nécessaires aux activités des intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord.

b) Examiner, vérifier ou contrôler les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord et réglementer le respect effectif des obligations en matière d'enregistrement et de déclaration prévues par ledit Accord.

c) Vérifier, au moyen de contrôles périodiques, l'élaboration et l'application par les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 des programmes obligatoires mentionnés à l'article 15 du présent Accord.

d) Communiquer aux autorités compétentes les renseignements obtenus en application du présent Accord auprès des intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10, y compris les renseignements provenant du contrôle d'un de ces intermédiaires ou établissements.

e) Promulguer des instructions et recommandations qui aident les intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 à détecter d'éventuels comportements suspects chez leurs clients. Ces mesures, qui tiennent compte de techniques modernes et sûres de gestion des avoirs, servent à la formation du personnel desdits intermédiaires et établissements financiers.

f) Coopérer avec les autorités compétentes et fournir à celles-ci toute l'assistance technique possible aux fins des enquêtes et actions relatives aux infractions définies à l'article 2 du présent Accord et autres crimes liés au trafic illicite de drogues et crimes connexes.

Les autorités compétentes, en particulier celles qui sont dotées de pouvoirs de réglementation et de supervision sur les intermédiaires financiers en application du droit interne de chaque État partie, doivent sans tarder porter à la connaissance des autres autorités compétentes tous renseignements fournis par les d'intermédiaires financiers au sujet d'opérations ou activités suspectes qui pourraient être liés à des infractions définies à l'article 2 du présent Accord ou à d'autres crimes liés au trafic illicite de drogues et crimes connexes.

Les autorités compétentes, en particulier celles qui sont dotées de pouvoirs de réglementation et de supervision sur les intermédiaires financiers en application du droit interne de chaque État partie, doivent coopérer étroitement avec les autorités compétentes des autres États aux fins des enquêtes, actions et poursuites relatives aux infractions définies à l'article 2 du présent Accord, aux autres crimes liés au trafic illicite de drogues et crimes connexes, et aux infractions aux lois ou règlements administratifs applicables auxdits intermédiaires.

Article 18. Coopération internationale

Les juridictions et autorités compétentes des États parties coopèrent, en application du présent Accord et dans les limites de leur ordre juridique respectif, en prenant les mesures voulues pour s'entraider en matière de crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes.

La juridiction ou l'autorité compétente de chaque État partie peut, par la voie diplomatique, présenter à son homologue d'un autre État partie ou recevoir de cet homologue une requête aux fins d'identifier, détecter, saisir ou confisquer des biens, produits ou instruments liés à des crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes, et adopter les mesures voulues, notamment celles dont disposent les articles 4 et 5 du présent Accord.

Toute décision de justice ou condamnation définitive ordonnant la confiscation des biens, produits ou instruments, rendue par une juridiction compétente d'un autre État partie dans une affaire de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes est recevable comme preuve que ces biens, produits ou instruments peuvent faire l'objet d'une saisie, de mesures conservatoires ou de confiscation, selon le cas, en application du droit interne de chaque État partie.

La juridiction ou l'autorité compétente de chaque État partie peut recevoir par la voie diplomatique une requête émanant d'une juridiction ou autorité compétente d'un autre État partie aux fins d'une entraide concernant une enquête ou action d'ordre civil, pénal ou administratif, selon le cas, relative à des crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes ou à des violations des dispositions du présent Accord.

Cette entraide peut notamment consister à : fournir des exemplaires originaux ou des copies certifiées conformes de pièces et registres pertinents, y compris ceux des intermédiaires et établissements financiers dont il est question à l'article 10 du présent Accord et d'organismes publics; recueillir des témoignages dans le ressort de l'État partie requis; faciliter la présence ou la comparution volontaire, dans le ressort de l'État partie requérant, de personnes appelées à témoigner, y compris de personnes détenues; localiser ou identifier des personnes; signifier des actes de procédure; examiner des objet ou des lieux; réaliser des visites et perquisitions; communiquer des renseignements et des éléments de preuve; et indiquer des mesures conservatoires.

L'entraide visée au présent article est prêtée comme en disposent le droit interne de chaque État partie et les instruments internationaux en vigueur.

Article 19. Secret bancaire

Les dispositions légales relatives au secret bancaire ne font pas obstacle à l'application du présent Accord lorsque les renseignements sont demandés ou communiqués par une juridiction ou autorité compétente en application du droit interne de chaque État partie.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord doit être réglé par des moyens pacifiques reconnus en droit international.

Article 21

Le présent Accord doit être approuvé et ratifié par chaque État partie comme en disposent ses procédures constitutionnelles.

Les instruments de ratification et d'adhésion relatifs au présent Accords doivent être déposés auprès du Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale.

Le présent Accord a une durée indéfinie; il entrera en vigueur, à l'égard des États qui l'auront ratifié, dès le dépôt du troisième instrument de ratification et, à l'égard des autres États, à la date du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification ou d'adhésion.

Article 22

Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du Belize, lequel pourra aussi négocier un accord d'association.

Article 23

Le présent Accord peut être modifié du commun accord des Parties, en vertu de protocoles d'amendement qui entreront en vigueur selon les mêmes modalités que le présent Accord.

Article 24

Chaque État partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale, lequel communiquer la dénonciation à tous les États parties.

La dénonciation déploie ses effets à l'égard de la Partie intéressée un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétariat général du Système d'intégration de l'Amérique centrale.

Article 25

Le présent Accord n'admet aucune réserve.

Article 26

Le présent Accord doit être déposé auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies comme en dispose l'Article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.

En foi de quoi, le présent Accord a été signé à Saint Domingue le 6 novembre 1997, en neuf exemplaires originaux qui font tous également foi.

Le Ministre des relations extérieures de la République du Guatemala,

EDUARDO STEIN BARILLAS

Le Secrétaire d'État aux relations extérieures de la République dominicaine,

EDUARDO LATORRE

Le Ministre des relations extérieures et du culte de la République du Costa Rica,

FERNANDO E. NARANJO

Le Ministre des relations extérieures de la République d'El Salvador,

RAMÓN E. GONZALEZ GINER

Le Secrétaire aux relations extérieures de la République du Honduras,

J. DELMER URBIZO

Le Ministre des relations extérieures de la République du Nicaragua,

EMILIO ALVAREZ MONTALVAN

Le Ministre des relations extérieures de la République du Panama,

RICARDO ALBERTO ARIAS

